

Universidad de los Andes

Facultad de Economía

Bandas criminales en Colombia: ¿qué factores influyen en su presencia a nivel municipal?

Asesor: Gonzalo Vargas

Presentado por: Mónica Andrea López Cuevas (200912144)¹

junio, 2014.

¹ Agradezco a Gonzalo Vargas por su orientación, sus consejos, asesoría y colaboración durante la elaboración de este documento. Igualmente mis agradecimientos a Camilo Echandía y Fabio Sánchez por sus comentarios y sugerencias sobre la redacción y enfoque de este trabajo.

I. Introducción

Colombia se ha visto marcada por distintas muestras de violencia que ponen de manifiesto la presencia de grupos irregulares en el territorio nacional. La sociedad colombiana ha sido testigo del nacimiento y evolución de guerrillas, paramilitares, mafias y organizaciones delincuenciales que poco a poco han ido ganando protagonismo en la realidad del país. En este contexto, el desarrollo de las bandas criminales (Bacrim) se ha considerado como un fenómeno reciente en la historia de Colombia. Este escenario genera preocupación en la medida que deja en evidencia el posible surgimiento de otro tipo de grupo criminal cuya presencia y acciones han empezado a cobrar importancia desde la mitad de la última década.

El término Bacrim no involucra a uno sino a varios grupos criminales como Los Rastrojos, Los Urabeños, Las Águilas Negras, el Ejército Revolucionario Popular Anticomunista (Erpac), Los Paisas y Los Machos. El impacto de estos grupos se manifiesta en la violencia que provocan (homicidios, masacres y extorsión son los delitos que más se les atribuyen) y el control que ejercen en pueblos y ciudades con relación al manejo de economías legales e ilegales en el país.

En los últimos años se ha reconocido la importancia que las bandas criminales tienen en Colombia. Se han diseñado planes para contrarrestar sus acciones, dejando así claro que para el gobierno es relevante controlar su comportamiento. Una muestra de lo anteriormente mencionado es que continuamente se anuncian en prensa distintos golpes que se hacen a las bandas, como por ejemplo bajas o capturas a sus principales jefes. Otra forma de ver la acción del Estado frente a las bandas es analizando sus reportes con respecto a la lucha criminal, pues desde 2007 el Ministerio de Defensa informa sobre los avances logrados específicamente en contra de las Bacrim. A partir de 2010 se reportan al menos 2000 capturas anuales de miembros de estos grupos, mientras que el promedio de armas que se les incauta supera las 1600 unidades². Estos datos corroboran el reconocimiento a la existencia de bandas criminales y la amenaza que representan para el país, pero no reflejan necesariamente el éxito en su control. Esto se hace evidente al analizar las cifras correspondientes al número de Bacrim en el país con relación a su número de miembros. Usando datos de la Policía Nacional, Prieto (2013) encuentra que el

² Recuperado de la página oficial http://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/estudios%20sectoriales/info_estadistica/Avance%20de%20la%20Politica%20de%20Defensa%20y%20Seguridad.pdf con corte a diciembre de 2013.

número de bandas en territorio colombiano ha caído desde 2006 pero que el número de miembros de éstas ha aumentado. Este fenómeno sugiere que el poder se está concentrando sin que las bandas sean efectivamente combatidas por el Estado (Prieto, 2013).

Por tratarse de un fenómeno reciente, la aparición y desarrollo de las Bacrim en Colombia están suficientemente documentados pero sus causas no han sido completamente dilucidadas. Gran parte de las referencias que se encuentran con respecto a su evolución y accionar corresponden a reportes que realiza la prensa sobre el uso de la violencia contra la población o sobre el lucro que obtienen estos grupos a través del control de alguna actividad económica. Adicionalmente, en la opinión pública existen varias ideas que relacionan la presencia de las bandas criminales directamente con el proceso de desmovilización de paramilitares que comenzó en 2003.

Ligar el surgimiento de las Bacrim al proceso de desmovilización genera cuestionamientos sobre los factores que propician su nacimiento y evolución. Este trabajo de grado examina de manera empírica los factores que incidieron en la aparición y desarrollo de las bandas criminales en Colombia durante los primeros años a los que se atribuye este fenómeno, es decir de 2006 a 2008. El trabajo examina el efecto de la desmovilización de los paramilitares así como otros elementos que, dentro de la literatura económica, se consideran determinantes sobre el desarrollo de la criminalidad. Para esto se utilizan una estrategia, con datos a escala municipal; con modelos de respuesta binaria qué tipo de elementos afectan la probabilidad de presencia de una banda criminal.

La contribución de este documento va dirigida a la literatura económica del crimen y a la que se relaciona con la violencia, la delincuencia y la ilegalidad en Colombia. Teniendo en cuenta que las Bacrim se han convertido en actores relevantes en la evolución de la violencia a nivel municipal, los hallazgos de este trabajo de grado son una referencia para analizar la criminalidad en la actualidad y también en un escenario de negociación de la paz. Los resultados muestran que variables relacionadas con la antigua presencia paramilitar, la existencia de ciertas condiciones socioeconómicas en la población y el control de economías basadas en el narcotráfico y la minería pueden incidir en la aparición de Bacrim en el país. En síntesis, la presencia y desarrollo de las bandas criminales fueron propiciados por la desmovilización de paramilitares y por las oportunidades de lucro que ofrece delinquir. Lo anterior es un argumento para afirmar que existe

continuidad entre las bandas y los grupos paramilitares, pues ambos grupos giraron alrededor de los incentivos económicos de la criminalidad.

Este documento contiene 5 secciones. En la siguiente sección se presenta una revisión de la literatura científica sobre el crimen y la violencia en general y, también, sobre las bandas criminales en Colombia. En la tercera sección se muestra la metodología para la estimación y se describen los datos utilizados. La cuarta sección presenta los resultados encontrados a partir de los modelos de respuesta binaria y de la estimación a través de datos panel, sometidos a distintas especificaciones. La quinta sección presenta las conclusiones.

II. Revisión de literatura

Esta sección ofrece un marco conceptual para el desarrollo de la estrategia metodológica con base en una revisión de la literatura internacional y nacional sobre criminalidad y/o Bacrim. La estrategia busca encontrar de manera empírica qué hay detrás del nacimiento y evolución de las bandas en Colombia durante los primeros años a los que se atribuye su desarrollo, es decir de 2006 a 2008. Para empezar, se revisa la literatura que identifica las teorías económicas existentes sobre conflicto, crimen organizado y violencia. Luego se hace referencia a la literatura de carácter nacional que se ha desarrollado con respecto a las bandas criminales en Colombia: sus orígenes, influencias y accionar dentro del país. Finalmente se presenta una síntesis de los principales elementos de la literatura revisada, los cuales orientan la estrategia metodológica.

i. Criminalidad, conflicto y violencia

Desde la perspectiva económica se han propuesto distintas teorías sobre el crimen organizado, la violencia y sobre los principales factores que se consideran relevantes para explicar el nacimiento y desarrollo de la criminalidad. Estos factores se pueden clasificar en cuatro grandes grupos, los cuales hacen referencia al papel del Estado como figura de autoridad, los antecedentes de conflicto o criminalidad en ciertos territorios, la presencia de oportunidades lucrativas para el crimen y la existencia de ciertas condiciones sociales y económicas en la población. Esta subsección describe estos factores, así como la manera en que la literatura identifica empíricamente su influencia sobre la evolución de la criminalidad.

Para empezar es importante caracterizar lo que se entiende en este documento por crimen organizado, el cual ha sido objeto de estudio desde diversos ángulos de la literatura económica. Generalmente se le relaciona con actividades dirigidas al ejercicio de amenaza y violencia en contra de empresas tanto de carácter legal e ilegal para ejercer control en zonas estratégicas económicamente (Schelling, 1971). El hecho de ejercer control implicaría entonces el reconocimiento de la jerarquía que tiene la estructura criminal, además de su capacidad de infiltrar al Estado como figura de autoridad. Gambetta (1993) afirma que el crimen organizado (visto a través del caso de las mafias en Italia) se encarga de ofrecer seguridad de manera privada, ilegal y no oficial, además de apropiarse de rentas de mercados altamente lucrativos y de actuar como garante de reglas establecidas forzosamente en las zonas donde ejercen influencia. De acuerdo a Kumar y Skaperdas (2008) la autoridad ejercida por quienes se dedican al crimen organizado se basa en la venta de protección, sugiriendo que este fenómeno aparece en zonas de debilidad estatal. Lo anterior conduce al primer grupo de factores enunciado al iniciar la sección, el cual se refiere al débil papel del Estado como figura de autoridad.

En un contexto en el que existen distintas manifestaciones violentas (como el colombiano) es necesario distinguir al crimen organizado de la insurgencia, pues ambos recurren al uso de la violencia como medio para cumplir sus objetivos. En los trabajos *Transnational Organized Crime & International Security* de Berdal y Serrano, y *Problems and Dangers* de Williams y Savona (como se citan en Saab & Taylor, 2009), se considera que "la diferencia entre grupos guerrilleros y grupos dedicados al crimen organizado es que estos últimos actúan en búsqueda de lucro mientras que la insurgencia ve en el crimen un medio para financiar sus metas políticas". En Colombia existe controversia sobre si el fenómeno de las bandas criminales debería catalogarse como parte del conflicto armado interno, aunque el estudio de éste resulta relevante en este documento. Esto se debe a que desde la literatura económica, la insurgencia y el crimen organizado obedecen a factores similares. Dichos factores constituyen los otros tres grandes grupos de elementos que tienden a ser señalados como determinantes de la criminalidad.

El segundo grupo tiene que ver con la presencia pasada de grupos ilegales en zonas dónde se identifica la aparición de un nuevo agente criminal. Esto se relaciona con un pasado delincencial prevalente en lugares de confrontación armada y con ejercicios de desmovilización de fuerzas que se expresan violentamente. El estudio de los posibles efectos indeseados de un

proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) en un lugar en conflicto ha sido recurrente en la literatura. Según Schulhofer-Wohl y Sambanis (2010), existe una tendencia al aumento en la criminalidad y la violencia luego de realizarse estos procesos. Las razones por las que esto sucede giran alrededor de dos elementos: uno es la incapacidad del gobierno para enfrentar el posconflicto y la inseguridad (pues su dedicación giraba alrededor de la guerra) y el otro es el diseño de oportunidades (en un mecanismo costo-oportunidad) para los excombatientes, dada su familiaridad con la delincuencia (Schulhofer-Wohl & Sambanis, 2010).

En países que tienen una historia de conflicto, criminalidad y violencia han existido diversos intentos para finalizar la guerra mediante una desmovilización. Por esto, a continuación se describen dos ejemplos específicos que en la literatura económica se han desarrollado al respecto. Collier (1994) muestra que en Uganda un proceso de desmovilización no tiene un efecto a largo plazo sobre la criminalidad, mientras que el efecto de corto plazo está determinado por el acceso a la tierra que tengan quienes se acogieron a este. Revisando otro caso, Ojeleye (2011) sugiere que en Nigeria (conflicto del Delta) se debería probar un ejercicio de DDR; pero que su éxito depende, entre otras cosas, de un diseño eficiente de incentivos sociales y económicos que desalienten el uso de la vía armada al desmovilizado. Los dos casos anteriores indican que es relevante considerar el efecto que tiene la presencia pasada de grupos ilegales y su desmovilización sobre el desarrollo de la criminalidad. Esto se puede lograr empíricamente a través de variables que reflejen la existencia de organizaciones ilegales y/o su accionar violento en el lugar a estudiar.

El tercer grupo dentro de la literatura económica que se identifica como posible causante del crimen tiene que ver con las oportunidades de beneficio que ofrece la violencia y delincuencia en distintos territorios. Lo mencionado por Schulhofer-Wohl y Sambanis (2010) y Ojeleye (2011) se puede vincular con la existencia de incentivos (ya sea económicos, sociales o políticos) para quienes ejercen la criminalidad. Los beneficios de la violencia para quien la ejerce aparecen de manera reiterada en la literatura como motivos por los cuales las personas deciden participar de una organización criminal. Grossman (1999) se basa en la racionalidad de los agentes para afirmar que dicha decisión se materializa si el crimen ofrece más beneficios (medidos en términos económicos) al insurgente con respecto a la decisión de trabajar de forma legal.

De acuerdo a Collier y Hoeffler (1999, 2001), el ejercicio de la violencia podría entenderse como resultado de una serie de condiciones que permiten la aparición de grupos criminales como un tipo de negocio. Esto deja en evidencia que la existencia de oportunidades de lucro puede ser un predictor más importante del surgimiento de grupos rebeldes que la defensa de ideales sociales o políticos (Collier & Hoeffler, 1999, 2001). Dichas oportunidades se identifican en la literatura y en la evidencia empírica a través de variables relacionadas con la existencia de rentas para extraer, los ingresos de distintas comunidades y la presencia de economías con un alto margen de beneficios, como las que se basan en el uso de recursos naturales. Profundizando este aspecto, varios autores han recalcado la importancia que tiene el control de estas economías en una zona de conflicto. Collier (2000, 2004) afirma que cuando los recursos naturales representan una parte significativa del ingreso de un país, la viabilidad financiera de la actividad criminal es más alta. Lo anterior puede relacionarse con el elemento geográfico de la evolución de la criminalidad, pues los grupos tienden a asentarse en los lugares que propician el éxito de su actividad (Reuter, 1983). Así pues, la presencia de recursos que representan una oportunidad de beneficio por medios violentos puede conducir a que la población acuda a la criminalidad como forma de subsistencia, pues representa su mejor alternativa laboral.

El cuarto grupo de factores que aparece en la literatura económica hace referencia a ciertas características sociales y económicas en la población. De acuerdo a Demombynes y Ozler (2005) la contribución de elementos socioeconómicos como la desigualdad y la pobreza al crimen depende de la relación que tenga con la existencia de incentivos económicos para incurrir en la actividad criminal. Esa relación refleja el surgimiento de oportunidades para ejercer el crimen, por lo que representa un factor de riesgo para la aparición de la violencia criminal (Schulhofer-Wohl & Sambanis, 2010). En resumen, la pobreza y la desigualdad parecen reducir los costos de oportunidad de ingresar a organizaciones de carácter armado y/o ilegal.

Luego de revisar los distintos factores que según la literatura económica pueden ser relevantes para explicar la criminalidad, es importante revisar también los avances en la identificación y modelación empírica de este fenómeno. Este tipo de estimación tiende a partir del análisis de la decisión individual entre una actividad legal y una ilegal. Becker (1968) fue uno de los pioneros al respecto, al modelar (desde una perspectiva de equilibrio general) la maximización de utilidad de un posible criminal. Teniendo en cuenta este análisis, Ehrlich (1973)

fue uno de los primeros autores en intentar mostrar empíricamente los elementos que afectan el comportamiento de tasas de delito en Estados Unidos. Haciendo estimaciones sobre las ganancias y costos asociados al crimen y usando variables que reflejaban la desigualdad del ingreso en la comunidad, se encuentra evidencia econométrica que indica que el índice de criminalidad responde positivamente a las utilidades derivadas de esta actividad (Ehrlich, 1973).

Más recientemente, se encuentran estudios que se caracterizan por explicar la delincuencia agrupando las variables y dando énfasis a las que reflejan las razones lucrativas de la criminalidad. Un ejemplo de esto es el trabajo desarrollado por Fajnzylber, Lederman y Loaiza (2002), quienes pretenden dar razón del comportamiento de las tasas de homicidio y robo para varios países por medio de distintos grupos explicativos. Dichos grupos son el económico (variables de ingreso, desigualdad y crecimiento), el judicial (presencia de policía y severidad del castigo al criminal), el demográfico (variables de urbanización y composición etaria de población) y el cultural (presencia de comunidades religiosas, entre otros) (Fajnzylber, Lederman y Loaiza, 2002). Otra característica en la literatura empírica es la tendencia a usar modelos de datos panel en las estimaciones econométricas. De acuerdo a Martín y Navarro (2007), este tipo de modelos permiten mayor eficiencia a la hora de analizar las tendencias delincuenciales en las sociedades modernas pues facilitan la conjugación de distintos elementos. Estos elementos giran alrededor de las especificidades de los lugares que se buscan estudiar, además de factores clave en modelos de criminalidad como la renta, el desempleo, la educación, la presencia estatal, la desigualdad y la pobreza (Martín y Navarro, 2007).

ii. Las ‘bandas criminales’ en Colombia

La primera referencia oficial de las ‘bandas criminales’ en Colombia se dio a inicios de 2006 en un informe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA); dicha misión estaba encargada de acompañar el proceso de desmovilización de paramilitares en el país. En su VI Informe, la MAPP/OEA (2006) alertó sobre fenómenos que implicaban el reagrupamiento de desmovilizados en bandas delincuenciales y la aparición de nuevos actores en las zonas donde antes había presencia paramilitar. A partir de entonces, y en los siguientes nueve informes, la Misión destacó la creciente presencia de este tipo de grupos en varias zonas del país, relacionándolos con la existencia del narcotráfico y otro tipo de economías ilegales como la minería y el contrabando. Por ejemplo, en el séptimo informe de la MAPP/OEA (2006) se

denunciaron violaciones a los acuerdos de desmovilización por parte de antiguos mandos medios de estructuras paramilitares, pues hacían parte de nuevos grupos delincuenciales que buscaban el control de economías ilícitas. La presencia de desmovilizados en las bandas criminales quedó confirmada cuando el Estado comenzó a ejercer presión frente a este tipo de grupos: el 17% de los miembros de bandas capturados hacían parte del programa de desmovilización (MAPP/OEA, 2007).

Este fenómeno no fue aislado, y de hecho, se profundizó en el territorio colombiano ya que comenzaron a darse alertas de rearme en distintos departamentos del país. Cesar, Magdalena, Sucre, Santander, Antioquia, Meta, Nariño y Putumayo fueron los primeros departamentos en los que se alertó sobre el posible rearme de las estructuras desmovilizadas y la aparición de nuevos grupos en los lugares en donde las autodefensas ejercían control (MAPP/OEA, 2007). En el mismo informe, la Misión reportó que los nuevos grupos criminales compartían algunos elementos de su "modus operandi" con los grupos desmovilizados. La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (2007) llegó a una conclusión similar y reportó que las acciones atribuidas a las Bacrim son similares a las cometidas por las autodefensas. Dichas acciones son en su mayoría: amenazas, asesinatos selectivos, extorsiones, boleteo a comerciantes y presión armada para tener control político, social, territorial y de economías ilícitas como el narcotráfico o la minería ilegal (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, 2007).

La preocupación sobre la expansión de los grupos que ahora se reconocen como Bacrim quedó reflejada en el Noveno Informe de la MAPP/OPEA (2007), en el que se recalca que las acciones de las nuevas estructuras mostraban la conformación de alianzas entre éstas y narcotraficantes, además de afectar gravemente a la población. Dicho impacto se hace notable a partir del análisis de eventos violentos realizado en el décimo informe de la MAPP/OEA (2008), donde se afirma que el aumento de las acciones violentas en Colombia se debe a procesos de consolidación y expansión nuevos grupos. Además, en el informe siguiente se encuentra que dichas organizaciones habían comenzado a realizar actividades dirigidas al control social, desarrollando una economía ilegal basada en la extorsión (MAPP/OEA, 2008). El desarrollo de actividades encaminadas al manejo de la población civil fue entonces uno de los pilares de las bandas y la extracción de rentas a la ciudadanía era una de las prioridades para consolidarse como autoridad. Este elemento comienza a destacarse como una amenaza para la sociedad colombiana,

hasta el punto que la MAPP/OEA (2009) llama a la acción integral del gobierno para hacer frente a este fenómeno delincencial en distintos municipios del país. De acuerdo al decimotercer informe de la misión las Bacrim no tenían un objetivo contrainsurgente (a diferencia de los paramilitares) sino que exponían una nueva dimensión de la delincuencia, al girar alrededor del mercado de la droga (MAPP/OEA, 2009). La forma en la que las nuevas organizaciones reclutaban a sus miembros fue otro elemento de interés en los últimos informes que realizó la MAPP. Se identificó que se tendía a reclutar a desmovilizados paramilitares y a personas jóvenes, primero a través de tareas relativamente sencillas en zonas urbanas para luego vincularlos a actividades de mayor importancia (MAPP/OEA, 2010). Finalmente, teniendo en cuenta la repercusión que comenzaron a tener las bandas en el país, en 2011 la MAPP/OEA celebró la creación de la Comisión Interinstitucional contra las Bandas y Redes Criminales por parte del Estado. Esto corroboró en ese momento la importancia del impacto que podía tener lo que ahora se conoce como Bacrim en el territorio colombiano.

La mayoría de estudios que se han realizado en Colombia con respecto a las Bacrim se caracterizan por ser de carácter descriptivo y buscan precisar qué son, cómo actúan y a qué se dedican las bandas. En general, se les cataloga como una forma de crimen organizado que se consolida alrededor del narcotráfico y otras fuentes de financiación como la minería ilegal o el contrabando (Prieto, 2013). Según Massé (2012), las Bacrim siguen una lógica mafiosa pues van en busca de la renta que ofrecen las actividades ilegales en el país. Al ser descritas como un fenómeno de crimen organizado, las bandas criminales se caracterizan entonces por ir en búsqueda de renta en actividades que les ofrecen el mayor lucro posible. El control del narcotráfico es reconocido como uno de los principales objetivos de las Bacrim, pero con el paso del tiempo han adquirido importancia actividades como la minería, el lavado de activos, la extorsión y el tráfico ilegal de gasolina (Arias, 2012).

La consolidación y expansión territorial de las bandas criminales también ha sido objeto de estudio, pues sus intereses y sus formas de expansión quedan en evidencia cuando se analizan las zonas por donde se mueven. Por un lado, se ha observado que estas organizaciones están en constante cambio, lo que se ve reflejado en el hecho de que pasaron de ser diversos grupos en sus inicios a ser menos en la actualidad, lo que sugiere que han pasado por procesos de reagrupación, absorción y expansión en el plano territorial (Arias, 2012). Por otro lado Granada, Restrepo y

Tobón (2009) afirman que su dominio se ha ampliado a zonas en las que no había conflicto armado, lo que confirma su creciente importancia en la realidad nacional. A raíz de esto, varias instituciones (oficiales y privadas) han hecho seguimiento al comportamiento de las bandas en Colombia, mostrando incluso distintas cifras sobre el fenómeno, lo que alimenta el debate sobre su papel en el país. Una de las fuentes que más ha dado indicios sobre la alarma que representan las Bacrim es el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Ellos han desarrollado una serie de informes desde el proceso de desmovilización de paramilitares con el fin de seguir el comportamiento de grupos que han sido catalogados como bandas criminales. Desde el quinto de estos informes Indepaz (2011) ha identificado que estos grupos han aumentado su presencia en el territorio nacional, mostrando que el porcentaje de afectación (presencia de bandas criminales en los municipios) pasa del 50% en 10 departamentos. Las bandas criminales que se han consolidado en el país son Los Rastrojos, Los Urabeños, Las Águilas Negras, el Erpac, Los Paisas y la Oficina de Envigado.

Es necesario también discutir la relación de estos grupos con la presencia de economías ilegales y el paramilitarismo. Por un lado, Escobedo (2009) afirmó, al hacer un ejercicio de superposición de municipios con drogas y con bandas, que éstas articulan alrededor de distintas fases del narcotráfico. Esto confirmaría la idea de que las bandas buscan el mayor lucro posible, a través del control o manejo de economías con un alto margen de beneficios. Por el otro lado, Granada et al. (2009) (a partir de un análisis geográfico a nivel municipal de la presencia de paramilitares en 2002 y la presencia de nuevas organizaciones después de 2006), encuentran evidente la presencia de las bandas en zonas dónde estaban los paramilitares antes de su desmovilización.

Argumentos como los anteriores, de acuerdo a Echandía (2013) implicarían la continuidad de las Bacrim con los grupos que se acogieron a la desmovilización, pues éstos permanecían en zonas similares a donde las bandas realizan su actividad en la actualidad. Las bandas estaban presentes en 22 departamentos del país (a 2011) que coincidían en su mayoría con zonas de presencia de AUC y de explotación minera o que estaban relacionadas con el negocio de las drogas, lo que mostraría que las Bacrim tuvieron herencia paramilitar (Echandía, 2013). Según Grajales (2011), el proceso de desmovilización pudo haber conducido al surgimiento de grupos

criminales debido a que algunos mandos medios no tenían suficientes incentivos para alejarse de la ilegalidad.

A pesar de la abundancia de escritos sobre las Bacrim, la literatura económica es escasa y pocos trabajos abordan de manera explícita y rigurosa la cuestión de su origen usando la información disponible. En Colombia, se ha explorado la idea de que la violencia se da en lugares donde se combinan las precariedades y la oportunidad de extracción de rentas. Se ha confirmado que en municipios con desigualdad y alto potencial de riqueza existe mayor probabilidad de presencia de criminalidad (Sarmiento & Becerra, 1998; Sarmiento, 1999). Por otro lado, Betancur (2010), intentó ver qué efectos tuvo el proceso de desmovilización de paramilitares sobre el crimen. A través de un modelo de datos panel con efectos fijos para el período comprendido entre 1995 y 2008, se encontró que la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara (reflejada a través del número promedio de desmovilizados por barrio) explica la reducción de la tasa de homicidios en la ciudad de Medellín; aunque se identificó también una tendencia al aumento de la violencia para su último año de estudio (Betancur, 2010).

Hay varios estudios que sin referirse directamente a las bandas criminales, son relevantes por su temática o metodología. Por ejemplo, Montenegro, Posada y Piraquive (2000) encuentran que el mercado de las drogas y la explotación ilegal de recursos naturales generan incentivos para delinquir y conducen a un aumento la actividad criminal. Sánchez y Núñez (2001) explican el comportamiento de la tasa de homicidios en Colombia a través de variables socioeconómicas, de presencia de actores armados y de desempeño judicial. Se encuentra que la violencia responde a la existencia de grupos ilegales, de actividades al margen de la ley y de la poca capacidad estatal para hacer justicia (Sánchez y Núñez, 2001). En otro trabajo, Carrillo (2012) busca explicar el crimen en la costa Caribe colombiana a través de tres grupos de variables: el social (variables de densidad poblacional y desigualdad), el económico (variables de desempleo y PIB), y el judicial (variables de eficiencia policial). Por último se tiene el estudio de Bottía (2002), que se refiere a las causas de la presencia y expansión de las FARC, empleando una estrategia que vale la pena mencionar. A partir de una estimación realizada con modelos probit y tobit para los años 1998 a 2000, se encuentra que la presencia de la guerrilla responde más a la existencia de oportunidades de lucro (medida a través de la presencia de cultivos ilícitos y recursos naturales para explotar) que a la defensa de un interés popular o político (Bottía, 2002).

La revisión de literatura presentada en esta sección muestra que son escasos los trabajos que abordan la cuestión del surgimiento de las bandas criminales en Colombia empleando datos cuantitativos y técnicas econométricas. Por otro lado, los escritos revisados subrayan la importancia de que dicho análisis incorpore variables como la existencia de cultivos ilegales, la oportunidad de explotar recursos mineros y la presencia pasada de paramilitares (en el papel de antiguo grupo generador de violencia y crimen) como posibles elementos determinantes del surgimiento y desarrollo de las Bacrim en el país.

iii. Síntesis

La literatura revisada deja en evidencia que desde la teoría económica se han explorado (tanto intuitiva como empíricamente) las razones por las cuales los grupos criminales surgen, incurren en la violencia y se consolidan en sus territorios. La aparición de insurgencias y de grupos dedicados al crimen organizado parece responder a elementos vinculados a la oportunidad de lucro a partir del control ilegal de economías lícitas o ilícitas. También existe literatura que vincula a la criminalidad con la presencia estatal, pues en zonas donde ésta es débil pueden aparecer grupos ilegales que buscan autoridad. Además, hay evidencia que relaciona la presencia de grupos criminales con la existencia de pobreza y desigualdad en las sociedades, pues reducen el costo de oportunidad de vincularse al crimen. Incluso, dichos elementos pueden llevar a la población a expresarse de forma violenta al enfrentar estos fenómenos y tener la oportunidad de atenuarlos económicamente. En este marco conceptual, la literatura empírica revisada incluye variables como la presencia de cultivos ilícitos, la presencia de explotación minera, la existencia de rentas que extraer, la pobreza, y la presencia gubernamental. También es necesario destacar que la evidencia empírica sobre el comportamiento de la delincuencia y la violencia tiende a usar la modelación en datos panel, pues ofrece beneficios al permitir realizar un análisis más profundo sobre las tendencias de la criminalidad.

Según instituciones y personas dedicadas al estudio del conflicto y la violencia en Colombia, la existencia de las Bacrim se relaciona con los antiguos paramilitares, además de tener detrás una motivación "económica". Dicha motivación responde a la oportunidad de lucro mediante el control de actividades con alto margen de beneficios, además de la oportunidad de imponer una percepción de autoridad frente a la población que habita en los lugares donde centran su actividad. Siendo así, es vital que en la metodología de estimación se tenga en cuenta

la presencia de paramilitares y elementos que se relacionan con el aspecto lucrativo, como por ejemplo, el narcotráfico, la explotación de recursos naturales, la riqueza, la pobreza y la desigualdad.

El análisis de las bandas criminales en Colombia ha sido principalmente, y hasta el momento, de carácter descriptivo. Las ideas que se manejan sobre su nacimiento y desarrollo en el país han sido discutidas desde distintas ramas teóricas y a través de ejercicios comparativos con respecto a la presencia de estos grupos y la presencia de paramilitares o la existencia de algún tipo de economía lucrativa (narcotráfico y minería) en distintas zonas del país. Este trabajo es un ejercicio un poco más riguroso a la hora corroborar las razones por las cuales se dieron las Bacrim en Colombia y el porqué de su desarrollo. Las hipótesis que se han formulado al respecto no han sido probadas empíricamente (utilizando métodos econométricos y/o cuantitativos), por lo que no se sabe con exactitud qué tipo de factor (desmovilización, oportunidades de lucro u otros) pudo ser determinante para el nacimiento y evolución de las bandas criminales en el país. La contribución de este documento va dirigida precisamente a probar si los elementos a los cuales se atribuye el fenómeno de las Bacrim tienen validez desde la evidencia empírica, teniendo en cuenta los factores que dentro de la literatura económica se han encontrado como relevantes y buscando discriminar su impacto para el caso colombiano.

III. Estrategia metodológica

En esta sección se describe la estrategia de estimación. Adicionalmente, se realiza una descripción de los datos cuyo uso resulta fundamental en el desarrollo del presente trabajo.

i. Especificación empírica

Para identificar qué elementos hay detrás del surgimiento y desarrollo de las bandas criminales en el país, con base en las teorías expuestas y la disponibilidad de los datos, se parte del siguiente modelo base:

$$y_{it} = \beta_0 + \beta_1 x_{it} + \beta_2 z_{it} + \beta_3 w_{it} + \beta_4 q_{it} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

dónde y_{it} hace referencia a una variable dependiente correspondiente a la presencia o comportamiento de bandas criminales para el municipio i en el año t , x_{it} representa un vector de variables correspondientes a la desmovilización de paramilitares como causa de la criminalidad, z_{it} es un vector de características del municipio que reflejan la posible existencia de oportunidades de lucro como factor determinante del surgimiento de las bandas criminales, w_{it} representa a variables relacionadas con la pobreza y/o desigualdad, q_{it} representa a variables relacionadas con la influencia que puede tener el Estado frente a las Bacrim y ε_{it} es el término del error.

ii. Datos

Como se mencionó anteriormente, el presente documento busca identificar qué hay detrás del surgimiento y desarrollo de las bandas criminales en los municipios de Colombia.. A continuación se realiza una descripción de las variables que se utilizarán en la estimación.

Variable Dependiente

Para empezar, es importante subrayar que los datos concernientes al conflicto armado y la violencia en cualquier país son de difícil recolección. Según Spagat, Restrepo y Vargas (2006) dicha información es escasa, de difícil acceso, suele tener baja frecuencia y a menudo es muy agregada (geográficamente) y pobre en términos de clasificación. En Colombia, existen algunas fuentes que proporcionan datos sobre conflicto y, considerando el período de análisis, la desagregación geográfica, la claridad en la definición de las variables y la facilidad de acceso se optó por emplear la Base de Datos sobre Conflicto Armado Colombiano (BDCAC) de CERAC.

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, al querer buscar qué hay detrás del surgimiento y desarrollo de las Bacrim en Colombia, existen dos variables. La primera viene dada por una dummy que refleja la presencia municipal de las Bacrim en sus inicios, es decir un indicador que toma el valor de 1 cuando hay presencia de alguna banda en cada uno de los años comprendidos entre 2006 y 2008. Este indicador se construye a partir de la participación de este tipo de grupos en eventos de carácter violento y se encuentra en la BDCAC de CERAC. Esta variable también es compilada por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz),

pero sólo para los años comprendidos entre 2008 y 2011. Por esta razón se escoge la variable proporcionada por CERAC pues recoge lo que estaba sucediendo en los años que se señalan como los de inicio de las bandas criminales. Es llamativo el hecho de que capitales como Medellín, Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Montería, Villavicencio, Pasto, Bucaramanga, Sincelejo, Ibagué y Cali han tenido una presencia constante de Bacrim durante el período de estudio. Adicionalmente, Indepaz (2011) muestra que los departamentos con mayor presencia de bandas criminales son Cesar, Córdoba y Bolívar, los cuales tienen un porcentaje de afectación de su territorio en 2011 de 92%, 85%, y 75% respectivamente (ver Tabla No. 1).

Tabla No. 1

Comparativo de departamentos con mayor afectación de bandas criminales (2008-2011)

Departamento	Total de municipios	Número de municipios con presencia de BACRIM				Afectación (%)			
		2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011
Cesar	25	15	14	21	23	60	56	76	92
Córdoba	28	15	21	23	24	54	75	82	85
Bolívar	45	11	7	23	34	24	16	51	75
Meta	29	12	13	16	20	41	45	55	68
Sucre	26	9	7	16	17	34	27	61	65
Chocó	30	9	7	16	19	43	47	70	63
Valle	42	16	20	20	26	38	48	50	61
Antioquia	125	48	40	64	71	38	32	51	57
Atlántico	23	3	2	8	12	13	9	35	52
Magdalena	30	8	7	13	15	27	23	43	50
Norte de Santander	41	9	6	16	19	22	15	40	46
Nariño	64	13	18	24	28	10	28	37	43
Cauca	41	10	17	17	14	24	41	41	31

Fuente: Indepaz, VII Informe de presencia de grupos narcoparamilitares en 2011.

De CERAC se desprende también la segunda variable, que refleja la intensidad de las acciones de las bandas criminales, pero a nivel departamental. Esta variable viene dada por el número de eventos violentos en los que participan este tipo de grupos y, desafortunadamente, no está disponible a nivel municipal³. Su construcción en la BDCAC parte de que

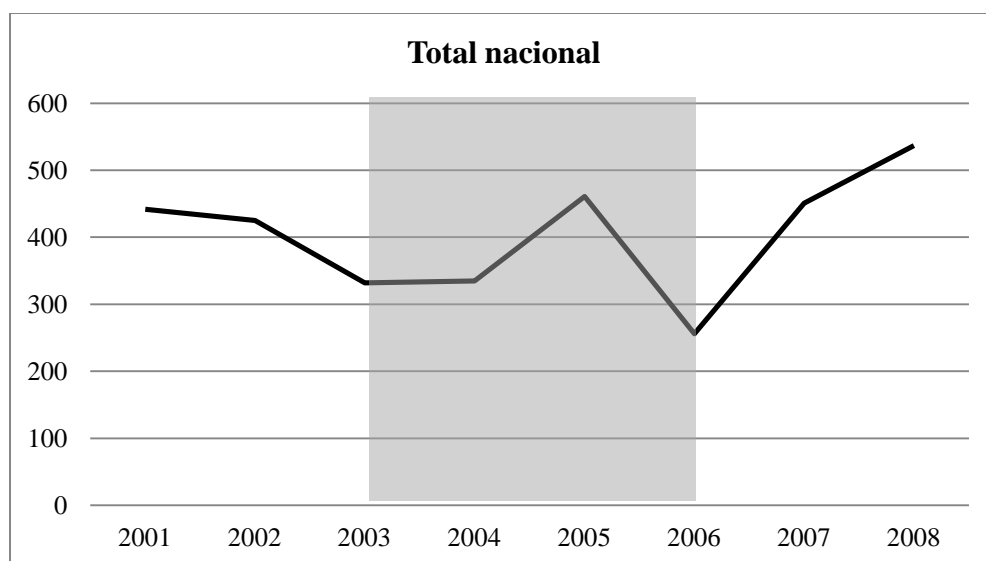
Los eventos que se incluyen son aquellos que están directamente relacionados con la violencia del conflicto, la cual se define como aquellas acciones que buscan la obtención de la opción social preferida por un grupo de conflicto, a través del daño intencional provocado a personas (civiles o combatientes), comunidades o infraestructura. (CERAC, 2009, p.591).

Con respecto a la variable que muestra el número de eventos en los que participan las bandas criminales a nivel departamental, hay que decir que CERAC identifica a las Bacrim asumiendo que existe continuidad entre éstas y los grupos que participaron en el proceso de desmovilización de las AUC. Siendo así, la variable refleja el conteo de acciones violentas relacionadas con eventos paramilitares o de bandas criminales⁴. Ésta recoge los eventos paramilitares desde 1999 hasta 2005, mientras que los eventos posteriores se adjudican al fenómeno de las bandas (desde 2006 en adelante). Teniendo en cuenta que el proceso de desmovilización se extendió entre 2003 a 2006, es interesante analizar qué sucede con el comportamiento de esta variable antes, durante y después de estas fechas. Se encuentra que los departamentos de Atlántico, Meta, Tolima, Casanare y Arauca son aquellos que presentan las caídas más significativas en cuanto al número de eventos después de darse por iniciado el proceso de desmovilización (ver Gráfica No.2). Este panorama no fue así para todos los departamentos del país, de hecho, al totalizar a nivel nacional se presenta una tendencia al alza en el número de eventos después de 2006 (ver Gráfica No.1). Santander, Cesar, Córdoba y Nariño son los departamentos que presentan los aumentos más significativos (ver Gráfica No.3).

³ Se contactó a CERAC para obtener estos datos a nivel municipal sin éxito. La organización afirmó que se debe a una restricción de recursos y al volumen de información, por lo que los únicos datos que podían ofrecer son los que están a disposición del público en su página web.

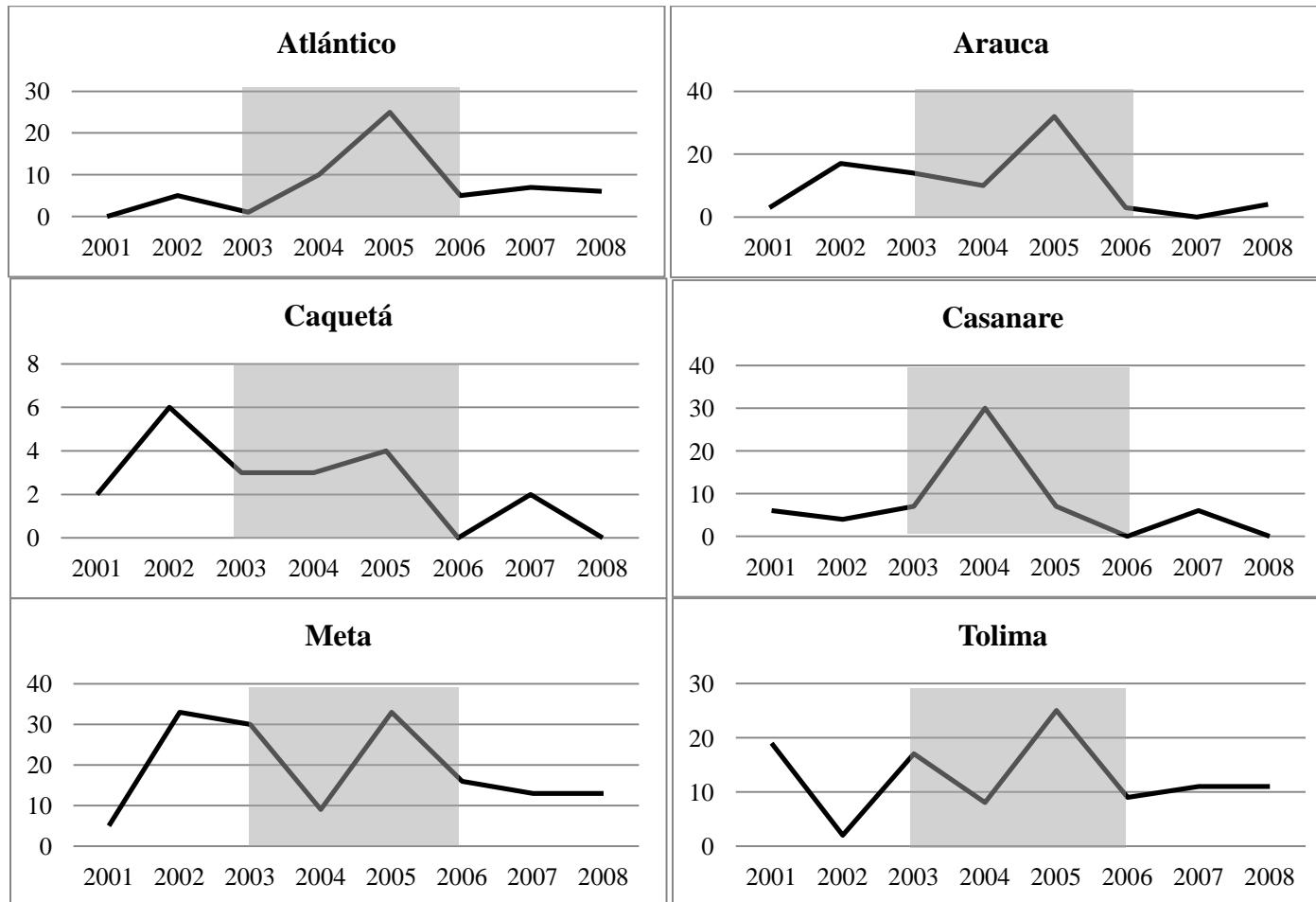
⁴ CERAC afirma que existe continuidad entre paramilitarismo y bandas criminales, por lo que en sus bases de datos y estudios al respecto de estas últimas hace referencia a grupos de carácter "neoparamilitar".

Gráfica No. 1
Número de eventos paramilitares/atribuibles a Bacrim



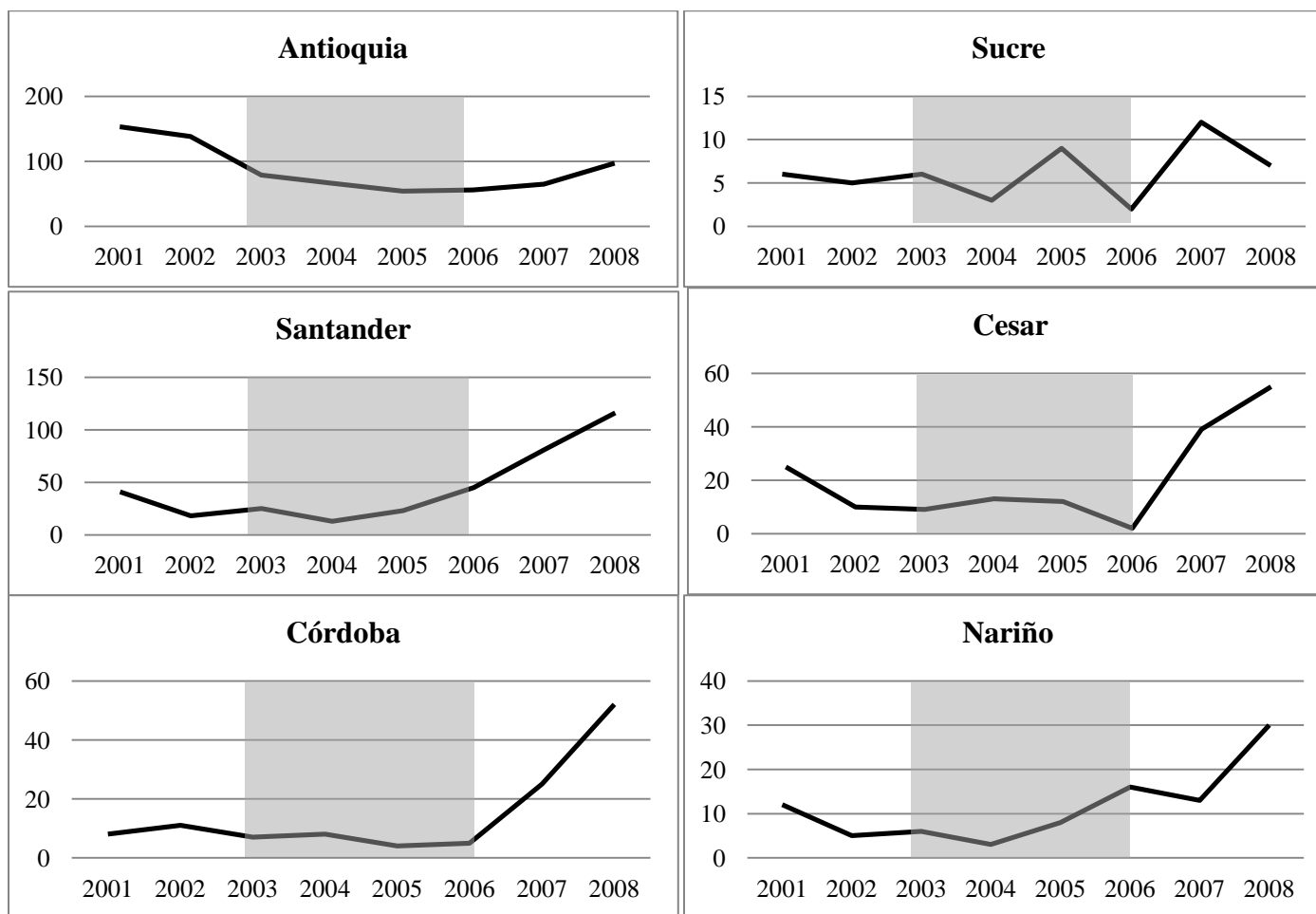
Fuente: BDCAC-CERAC, cálculos propios.

Gráfica No.2
Número de eventos paramilitares/ atribuibles a Bacrim; departamentos con tendencia a la baja



Fuente: BDCAC-CERAC, cálculos propios.

Gráfica No.3
Eventos paramilitares/ atribuibles a Bacrim; departamentos con tendencia al alza



Fuente: BDCAC-CERAC, cálculos propios

Variables independientes

Para el desarrollo del presente trabajo se tienen en cuenta distintos grupos de variables explicativas, cada uno relacionándose con las posibles variables mencionadas en la segunda sección como posible factor determinante de la criminalidad (ver Tabla No. 2).

Tabla No. 2
Lista de variables en uso

		Municipal
DEPENDIENTES		Dummy presencia Bandas Criminales 2006-2008
I N D E P E N D I E N T E S	Proceso de Desmovilización	Dummy presencia de AUC 2000
	Oportunidad de Lucro	Indicador Aptitud Territorial Cultivo Coca 2006-2008 Indicador Agregado Minería 2006-2008 Ingresos tributarios (miles de millones de pesos) 2006-2008
	Características Socioeconómicas	Incidencia de la pobreza 2005 NBI 2005
	Presencia Estatal	Índice de desempeño integral 2006-2008

El primer grupo de variables independientes corresponde a la idea de que el proceso de desmovilización de paramilitares resultó determinante para la aparición de las Bacrim en el caso colombiano. Su inclusión busca establecer si las hipótesis de Granada et. al (2009) y Grajales

(2011) sobre la relación entre autodefensas y bandas criminales tienen sustento desde el punto de vista econométrico. Las variables con las que se cuenta al respecto son indicadores que reflejan la presencia pasada de paramilitares a nivel municipal, las cuales están disponibles en la Base de Datos sobre Conflicto Armado Colombiano (BDCAC) de CERAC. Se toma la información de estas variables para el año 2000 pues Granada, Restrepo y Sánchez (2009) afirman, a través de un ejercicio descriptivo, que en ese año los paramilitares se encontraban en su punto más alto de expansión. Es evidente que las bandas se ubicaron en zonas similares a las que ocupaban los paramilitares para el año 2000, lo que indicaría que manejaron un comportamiento similar al de estos grupos (Ver Cuadro de Mapas No.1, Cuadro de Mapas No.2 y Cuadro de Mapas No.3). Además, de acuerdo a los datos recolectados, se encuentra que 7 de los departamentos que presentaron más actos violentos relacionados con paramilitares en el 2000 hacen a su vez parte de los departamentos que más presentan eventos relacionados con las Bacrim (ver Tabla No.3).

El segundo grupo de variables corresponde a la existencia de oportunidades económicas o de lucro como explicación de la aparición de las bandas criminales. La inclusión de este grupo responde a los argumentos de Collier y Hoeffler (1999, 2001) y a los hallazgos de Bottía (2002). A través del Sistema de Información Minero Colombiano (SIMCO) se obtuvieron cifras sobre la producción a nivel municipal de carbón, oro, plata y platino. Con base a esto se construyó un indicador minero agregado que toma el valor de 1 si en determinado lugar existe explotación de alguno de esos productos. Adicionalmente se tiene en cuenta la cifra de ingresos tributarios (propios) para cada municipio en el país, que es recopilada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP). En ausencia de una medida confiable del PIB municipal, se usa dicha variable como proxy de las rentas legales (es decir, la base gravable) de cada municipio.

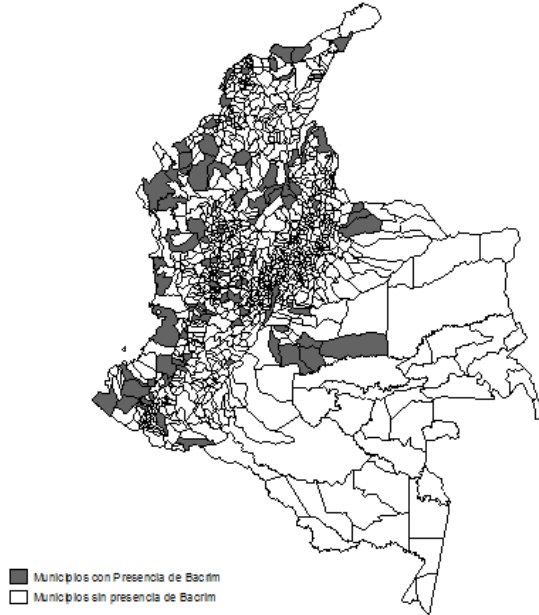
Otro elemento que pertenece a este grupo refleja la oportunidad de controlar las rentas de la producción de drogas ilícitas. La variable que representa el posible manejo de esta economía ilícita muestra la aptitud que tienen los municipios para que se dé un cultivo ilegal según dos parámetros. Según Rocha (2011), para que en un territorio se pueda cultivar coca es necesario tener suelos hasta los 1000 metros sobre el nivel del mar y lluvias entre 457 y 1062 milímetros anuales. Con los datos de la Base de Ideam (existente en el Centro de Datos del CEDE de la Universidad de los Andes), se construye una variable de aptitud que toma el valor de 1 si un municipio cumple con esas condiciones y 0 de lo contrario. Este primer parámetro se

complementa con uno que refleja si el municipio fue productor de coca en 2005 (toma el valor de 1), pues esto muestra la aptitud del lugar para el desarrollo del cultivo aunque no se hayan cumplido a cabalidad los requerimientos geográficos mencionados anteriormente. Esta información se obtiene del Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que ofrece la producción de coca a nivel municipal.

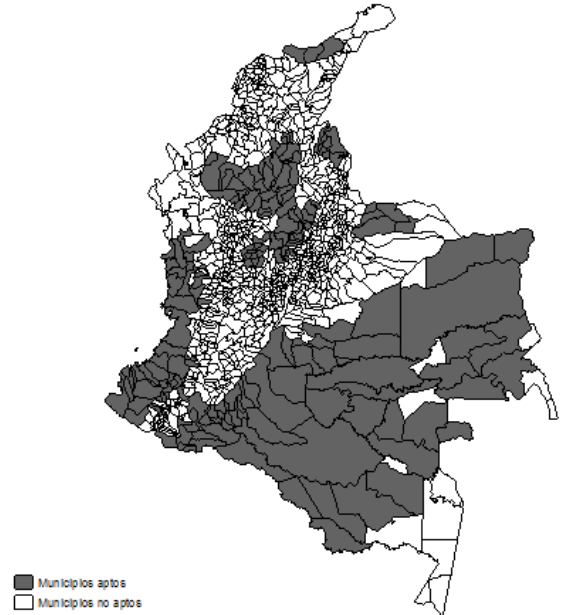
De acuerdo al Cuadro de Mapas No.1, Cuadro de Mapas No.2 y Cuadro de Mapas No.3, podría identificarse que hay cierta correspondencia geográfica entre los municipios "aptos" para el desarrollo de un cultivo ilícito y los que tienen presencia de Bacrim. Lo anterior reflejaría que las bandas se ubican en lugares estratégicos para el negocio de las drogas, algo similar a lo que mencionó Echandía (2013) con respecto a la presencia paramilitar. Al analizar los datos en busca de una relación entre este grupo de variables y las que describen el comportamiento de las bandas criminales en el país, se encuentran también varias coincidencias. Por ejemplo, 5 de los 10 departamentos que lideran la producción de oro en el Colombia hacen parte de los 10 departamentos que presentan más acciones de las bandas criminales. Así mismo, se encuentra que algunos de los municipios que lideran la producción de oro y plata tienen una presencia constante de bandas criminales durante el período comprendido entre 2006 y 2008. También se observan concordancias entre los municipios con una presencia constante de bandas criminales y aquellos que lideran la producción de coca a nivel nacional (5 de los 10 municipios con mayor producción promedio de coca en 2005 tienen una presencia constante de Bacrim en su territorio entre 2006 y 2008). Con respecto a los indicadores de riqueza, hay que mencionar que 8 de los 10 municipios con más ingresos tributarios tienen presencia de este tipo de grupos; mientras que a nivel departamental, 5 de los 10 departamentos que lideran el recaudo tributario son departamentos que también se caracterizan por un alto número de eventos relacionados con las Bacrim en los últimos años (ver Tabla No.3 y Tabla No.4).

Cuadro de Mapas No.1

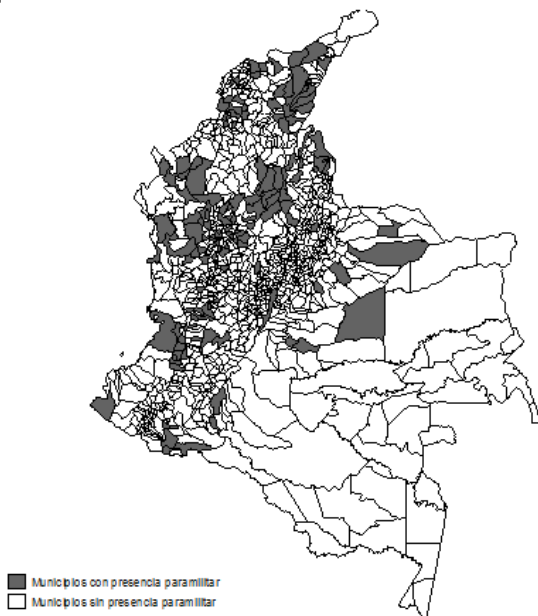
Presencia de Bandas Criminales 2006



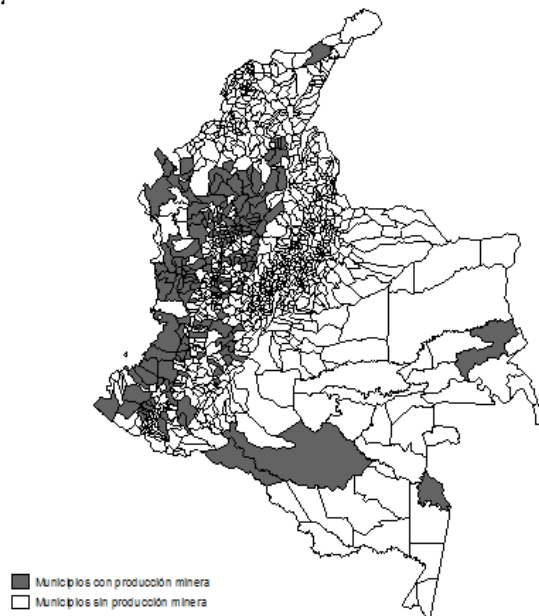
Aptitud para el cultivo de la coca 2006



Presencia Paramilitar 2000



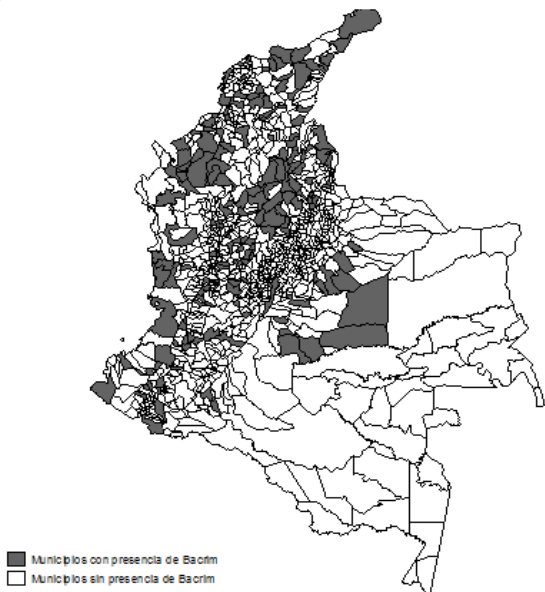
Producción Minera 2006



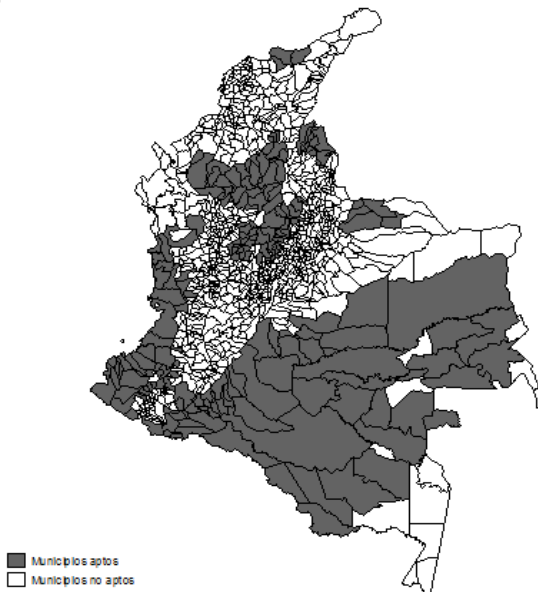
Fuente: CERAC, SIMCI, SIMCO, cálculos propios.

Cuadro de Mapas No.2

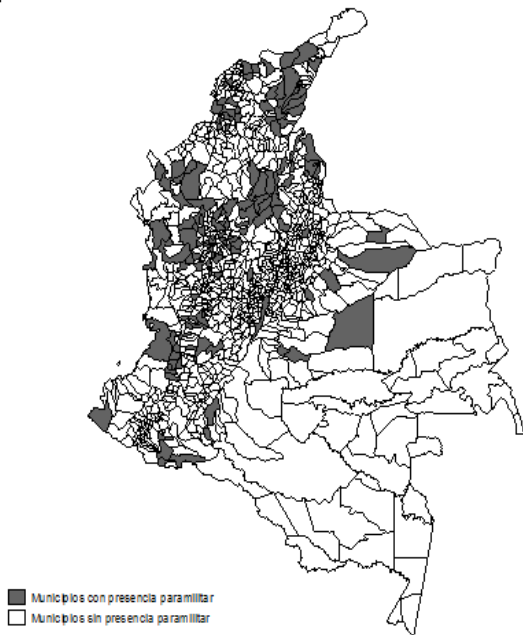
Presencia de Bandas Criminales 2007



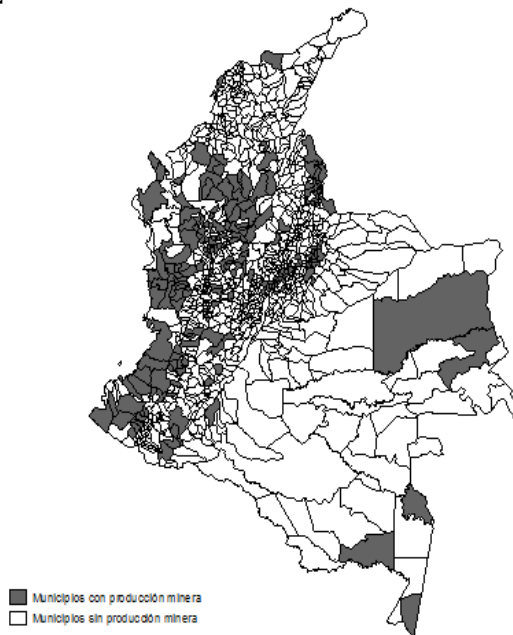
Aptitud para el cultivo de la coca 2007



Presencia Paramilitar 2000



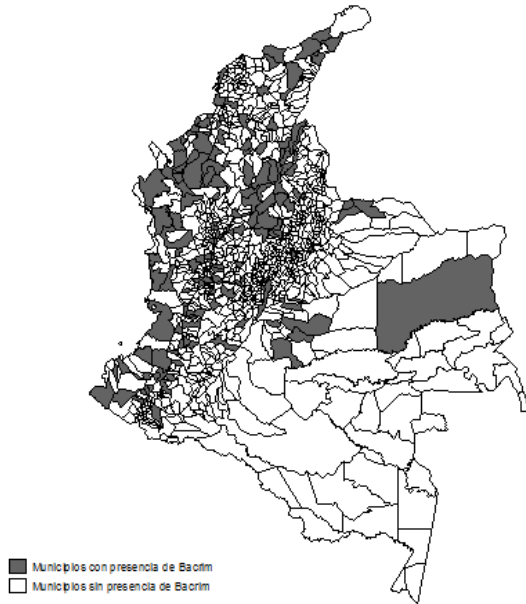
Producción minera 2007



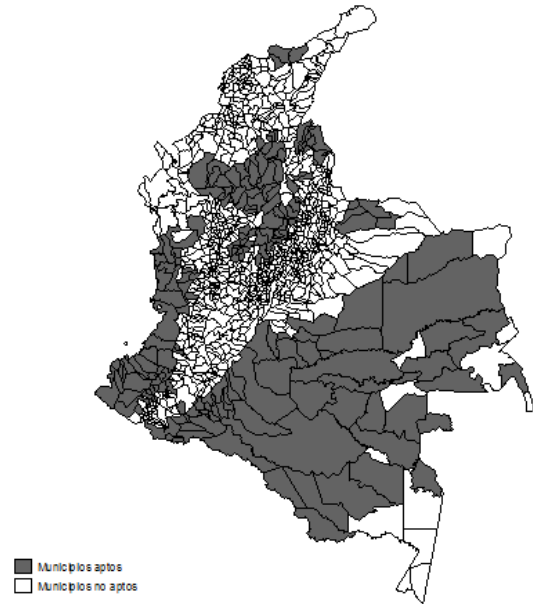
Fuente: CERAC, SIMCI, SIMCO, cálculos propios.

Cuadro de Mapas No.3

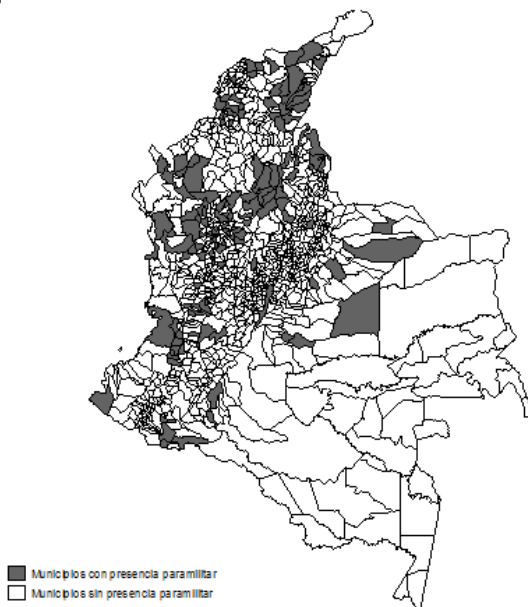
Presencia de Bandas Criminales 2008



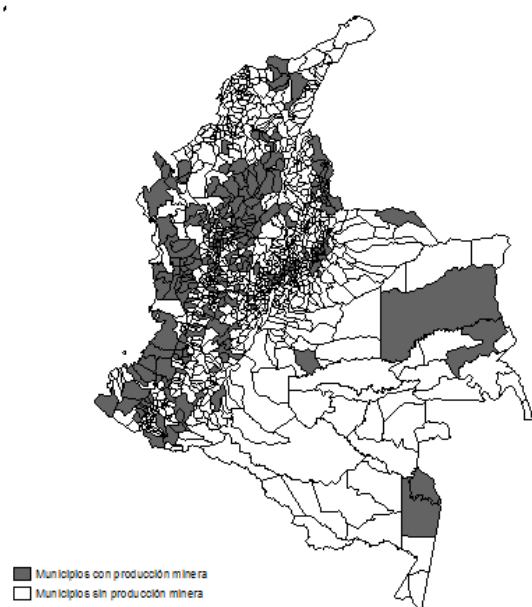
Aptitud para el cultivo de la coca 2008



Presencia Paramilitar 2000



Producción Minera 2008



Fuente: CERAC, SIMCI, SIMCO, cálculos propios.

Tabla No. 3

Ranking de departamentos líderes en				
Eventos Bacrim	Eventos Paramilitares	Producción de coca	Producción de carbón	Producción de oro
SANTANDER	ANTIOQUIA	NARIÑO	RISARALDA	HUILA
ANTIOQUIA	SANTANDER	META	CUNDINAMARCA	CORDOBA
CESAR	BOLIVAR	PUTUMAYO	SUCRE	CAUCA
CÓRDOBA	CAUCA	GUAVIARE	ATLÁNTICO	GUAJIRA
CALDAS	CESAR	ANTIOQUIA	GUAVIARE	CALDAS
NARIÑO	V/ DEL CAUCA	VICHADA	BOLÍVAR	QUINDIO
BOLIVAR	MAGDALENA	CAQUETA	SANTANDER	GUAINIA
CAUCA	TOLIMA	BOLIVAR	CHOCO	CESAR
V/ DEL CAUCA	N. SANTANDER	CAUCA	PUTUMAYO	RISARALDA
META	NARIÑO	ARAUCA	TOLIMA	NARIÑO
Producción de plata	NBI	Incidencia de la pobreza	Ingresos tributarios	Índice de Desarrollo
CORDOBA	GUAINIA	ANTIOQUIA	HUILA	CASANARE
HUILA	VAUPES	CAQUETA	CAUCA	CAQUETA
CAUCA	CHOCO	CHOCO	CÓRDOBA	SUCRE
QUINDIO	AMAZONAS	GUAVIARE	BOGOTA	META
NARIÑO	CORDOBA	MAGDALENA	CASANARE	BOYACA
RISARALDA	SUCRE	CESAR	ANTIOQUIA	CAUCA
GUAJIRA	CAQUETA	GUAINIA	BOYACA	HUILA
AMAZONAS	CESAR	GUAJIRA	CUNDINAMARCA	CALDAS
GUAINIA	MAGDALENA	QUINDIO	BOLIVAR	CUNDINAMARCA
CESAR	BOLIVAR	VAUPES	CALDAS	GUAJIRA
<p>Los departamentos resaltados son aquellos que además de ser líderes en el rubro indicado, se caracterizan por un alto número de eventos relacionados con las bandas criminales hasta 2008.</p>				

Fuente: INDEPAZ, SIMCO, SIMCI y DNP, cálculos propios.

Tabla No. 4

Ranking de municipios líderes en					
Producción de coca	Producción de oro	Producción de plata	Producción de carbón	Incidencia de la pobreza	Ingresos tributarios
CUMARIBO	SEGOVIA	MARMATO	SARDINATA	ARGELIA	BOGOTA, D.C.
PUERTO RICO	MACEO	SEGOVIA	EL ZULIA	MEDIO ATRATO	MEDELLIN
VISTAHERMOSA	EL BAGRE	TITIRIBI	PUERTO LIBERTADOR	MIRITI - PARANA	CALI
SAN ANDRES DE TUMACO	REMEDIOS	REMEDIOS	GUACHETA	PUERTO ALEGRIA	BARRANQUILLA
SAN JOSE DEL GUAVIARE	TARAZA	MACEO	CUCUNUBA	PUERTO COLOMBIA	CARTAGENA
MAPIRIPAN	CACERES	TARAZA	CUCUTA	PAPUNAUA	BARRANCABERMEJA
EL RETORNO	MARMATO	EL BAGRE	SUTATAUSA	EL CHARCO	BUCARAMANGA
LEGUIZAMO	CAUCASIA	CAUCASIA	SAMACA	MAGUI	PEREIRA
ROBERTO PAYAN	SIMITI	MEDELLIN	LENGUAZAQUE	JURADO	ENVIGADO
MAGUI	MONTECRISTO	ATRATO	PAIPA	ATRATO	YUMBO
Los municipios resaltados son aquellos con al menos dos años de presencia de BACRIM en su territorio durante 2006-2008.					

Fuente: INDEPAZ, SIMCO, SIMCI y DNP, cálculos propios.

El tercer grupo de variables explicativas se relaciona a la hipótesis de Demombynes y Ozler (2005) con respecto al impacto de la desigualdad y la pobreza sobre la formación de grupos delincuenciales. Se incluyen variables correspondientes a la incidencia de la pobreza y al índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI), a nivel municipal, cuya fuente es el DNP. Al realizar el mismo ejercicio de comparación entre los lugares que lideran estos indicadores y los que son más representativos en cuanto al comportamiento o presencia de las bandas criminales no se encuentra una relación tan clara como la vista con el grupo anterior. De acuerdo a la Tabla No. 4 sólo un municipio hace parte del grupo de los que presentan más incidencia de la pobreza y a la

vez de los que cuentan con una presencia constante de bandas criminales en su territorio de 2006 a 2008.

Finalmente se tiene una variable relacionada con la presencia estatal, pues se busca ver qué tipo de papel ejerce el Estado frente a las bandas. Los datos que serían ideales a incluir estarían relacionados con el número de policías y/o estaciones de servicio policial por cada municipio de Colombia, pero se presentarían problemas de endogeneidad. Por esta razón, se busca una variable que refleje la capacidad administrativa del Estado a escala local. Espinosa y Villegas (2013) proponen un índice de desempeño integral que se construye a partir de componentes relacionados con la eficacia, eficiencia, gestión y cumplimiento de requisitos legales por parte de un ente territorial. Este índice es calculado anualmente por el DNP para cada municipio del país.

IV. Resultados

Partiendo del modelo base expuesto en la tercera sección, se utilizan una estrategia para determinar qué elementos hay detrás de la existencia de bandas criminales en el país. La variable dependiente es la presencia de bandas criminales en municipios de Colombia para el período comprendido de 2006 a 2008. Las variables independientes pueden ser datos contemporáneos, que han sido constantes a lo largo del tiempo o que corresponden a períodos anteriores; cada uno dependiendo de su disponibilidad y de posibles problemas de endogeneidad en las estimaciones.

i. Modelo a escala municipal: elementos que afectan la probabilidad de presencia de una banda criminal.

La estimación correspondiente al caso municipal busca encontrar los factores que afectan la probabilidad de que una banda criminal haga presencia en los municipios de Colombia. De esta manera, el propósito del modelo desarrollado es identificar si las variables correspondientes a cada uno de los grupos explicativos mencionados en la descripción de los datos inciden en la presencia de bandas criminales que reporta CERAC.

Al ser la variable dependiente de carácter dicótomo, la estrategia a usar es la de un modelo de respuesta binaria para el período comprendido entre 2006 y 2008. La elección de estos años se debe principalmente al deseo de identificar empíricamente qué sucede inmediatamente después de darse el proceso de desmovilización y ver cómo se comportó el desarrollo de las bandas criminales durante los primeros años a los que se referencia su existencia. De esta manera, la ecuación a estimar se describe por:

$$\begin{aligned}
 & \textit{PresenciaBacrim}_{it} = \\
 & \beta_0 + \beta_1 \textit{PresenciaAUC2000}_i + \beta_2 \textit{IndicadorAptitudTerreno}_{it} + \beta_3 \textit{IndicadorMinería}_{it} + \\
 & \quad \beta_4 \textit{IngresosTributarios}_{it} + \beta_5 \textit{IncidenciaPobreza2005}_i [\textit{NBI2005}_i] + \\
 & \quad + \beta_6 \textit{IndicadorDesempeñoIntegral}_{it} + \beta_7 \textit{IngresosTributarios}_{it} \times \textit{NBI2005}_i + \varepsilon_{it} \quad (2)
 \end{aligned}$$

Realizando las correspondientes pruebas estadísticas se desarrollan distintas estimaciones con un modelo probit con errores robustos; adicionando como variable independiente una referente a la interacción entre ingresos tributarios y NBI. Esto responde a la idea de que la coexistencia entre privaciones y rentas que extraer conlleva a la criminalidad, siguiendo la tendencia de los argumentos ya mencionados de Demombynes y Ozler (2005) y Schulhofer-Wohl y Sambanis (2010). Los resultados correspondientes se reportan en la Tabla No. 5; las dos primeras columnas hacen referencia a las estimaciones que incluyen la variable de incidencia de la pobreza como variable que refleja la condición socioeconómica de la población, mientras que las otras dos incluyen el NBI.

Tabla No. 5
Modelo Probit : Presencia de Bandas Criminales 2006-2008, efectos marginales

VARIABLES	(1)	(2)	(3)	(4)
Presencia AUC 2000	0.0853** (0.0362)	0.0805** (0.0360)	0.0875** (0.0363)	0.0824** (0.0362)
Indicador Aptitud Terreno Coca	0.0914** (0.0410)	0.0897** (0.0409)	0.0858** (0.0402)	0.0845** (0.0401)
Indicador Minería Oro/Plata/Platino	0.0682* (0.0379)	0.0702* (0.0378)	0.0709* (0.0379)	0.0726* (0.0378)
Ingresos Tributarios	0.000168 (0.00260)	0.000193 (0.00257)	0.000754 (0.00259)	0.000736 (0.00255)
Incidencia Pobreza 2005	-0.0706 (0.145)	-0.0630 (0.145)		
Interacción Ing Tributarios y NBI	0.000579*** (0.000161)	0.000582*** (0.000161)	0.000571*** (0.000165)	0.000574*** (0.000165)
Índice Desempeño Integral	-0.00139 (0.00146)	-0.00144 (0.00147)	-0.00115 (0.00147)	-0.00123 (0.00148)
NBI 2005			6.54e-05 (0.00101)	8.24e-05 (0.00100)
Efectos de Año	SI	NO	SI	NO
Observaciones	965	965	965	965

Errores estándar robustos en paréntesis

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Los resultados reportados en la tabla No. 5 presentan sesgo en los coeficientes, pues existe un problema en la estimación con respecto a la variable de presencia paramilitar⁵. Esto se debe a que la presencia de autodefensas en el 2000 y la presencia de bandas pueden responder a factores similares (incentivos para la actividad criminal) por lo que se estarían

⁵ Agradezco a Fabio Sánchez por notar este problema y hacer recomendaciones para solucionarlo.

omitiendo variables en el modelo. Por esta razón, se optó por instrumentar la variable presencia paramilitar usando la distancia mínima de cada municipio a aquellos que fueron polos del paramilitarismo en 1990, cuando este fenómeno estaba apenas ganando importancia a nivel nacional (lo que capturaría forma de expansión).

Este instrumento es válido porque es exógeno a los factores que incidieron sobre la presencia de bandas criminales desde 2006 e impacta a la presencia de las éstas sólo a través de la manera en la que captura el comportamiento territorial de las AUC. La información sobre presencia paramilitar en 1990 también se encuentra en la BDCAC de CERAC: 24 municipios de Colombia tuvieron presencia paramilitar en ese año. Estos municipios se consideran como polos del fenómeno de las autodefensas, pues alrededor de éstos se dio su expansión en el país. Luego se obtuvo la distancia de cada uno de los municipios de Colombia con dichos polos, para seleccionar la mínima como variable que refleja el comportamiento de los paramilitares a nivel territorial. La distancia no responde a elementos lucrativos sobre la criminalidad sino a los factores que incidieron en la territorialidad de los paramilitares. Algunos de dichos factores son la cercanía a los lugares en los que se asentaban sus jefes, los territorios que ya estaban bajo el control de otros grupos, la facilidad de moverse, entre otros. Siendo así, el modelo a estimar es una variación al expuesto en la ecuación 2:

$$\begin{aligned}
 & \textit{PresenciaBacrim}_{it} \\
 &= \beta_0 + \beta_1(\textit{PresenciaAUC2000}_i = \alpha_0 + \alpha_1 \textit{distminpol1990}_i) \\
 &+ \beta_2 \textit{IndicadorAptitudTerreno}_{it} + \beta_3 \textit{IndicadorMinería}_{it} \\
 &+ \beta_4 \textit{IngresosTributarios}_{it} + \beta_5 \textit{IncidenciaPobreza2005}_i [\textit{NBI2005}_i] \\
 &+ \beta_6 \textit{IndicadorDesempeñoIntegral}_{it} + \beta_7 \textit{IngresosTributarios}_{it} \\
 &\times \textit{NBI2005}_i + \varepsilon_{it} \quad (3)
 \end{aligned}$$

Este modelo, al ser la variable dependiente de tipo dicotómico, se estima a través del método ivprobit. Las estimaciones muestran que el instrumento usado es el adecuado, además de que reporta el signo esperado. Los resultados de la primera etapa se reportan en la Tabla No. 6 y muestran que la distancia mínima del municipio con los polos de

paramilitarismo es relevante para la presencia de estos grupos en el 2000, además de que su coeficiente es negativo. Esto quiere decir que a mayor distancia exista entre un municipio y un polo de 1990, menor es la probabilidad de presencia de un grupo paramilitar en el 2000. Adicionalmente, las otras variables independientes del modelo no resultan relevantes ensobre la presencia de autodefensas en el 2000.

Tabla No. 6
Modelo IVProbit, Primera etapa: Presencia de AUC en el 2000

VARIABLES	(1)	(2)	(3)	(4)
Indicador Aptitud Terreno Coca	-0.206* (0.109)	-0.204* (0.110)	-0.210* (0.111)	-0.208* (0.111)
Indicador Minería Oro/Plata/Platino	0.0592 (0.0362)	0.0592 (0.0360)	0.0586 (0.0360)	0.0586 (0.0359)
Ingresos Tributarios	-7.41e-05 (0.000443)	-7.11e-05 (0.000442)	-7.08e-05 (0.000437)	-6.73e-05 (0.000436)
Incidencia Pobreza 2005	-0.0123 (0.109)	-0.0109 (0.109)		
Interacción Ing Tributarios y NBI	3.24e-05 (4.81e-05)	3.21e-05 (4.80e-05)	3.20e-05 (4.72e-05)	3.16e-05 (4.71e-05)
Indice Desempeño Integral	-0.00216 (0.00136)	-0.00211 (0.00135)	-0.00222 (0.00135)	-0.00217 (0.00134)
NBI 2005			-0.000201 (0.000858)	-0.000191 (0.000856)
DistMinPolo	-0.000389** (0.000201)	-0.000389** (0.000201)	-0.000383** (0.000203)	-0.000383** (0.000203)
Constante	0.731*** (0.183)	0.697*** (0.181)	0.737*** (0.163)	0.704*** (0.161)
Efectos de año	SI	NO	SI	NO
Observaciones	967	967	967	967

Errores estándar robustos en paréntesis

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Sabiendo que el instrumento elegido es válido se procede a continuar con la estimación, los resultados se reportan en la Tabla No. 7. Las dos primeras columnas hacen referencia a las estimaciones que incluyen la variable de incidencia de la pobreza como variable que refleja la condición socioeconómica de la población, mientras que las otras dos incluyen al NBI.

Tabla No. 7
Modelo IVProbit, Segunda etapa : Presencia de Bandas Criminales 2006-2008, efectos marginales

VARIABLES	(1)	(2)	(3)	(4)
PresenciaAUC2000 (=distanciamínimapolo)	0.685*** (0.02372)	0.683*** (0.02421)	0.687*** (0.01988)	0.686*** (0.02042)
Indicador Aptitud Terreno Coca	0.158** (0.06511)	0.156** (0.06509)	0.170** (0.06569)	0.168** (0.06577)
Indicador Minería Oro/Plata/Platino	-0.019 (0.03966)	-0.018 (0.03959)	-0.019 (0.03903)	-0.019 (0.03891)
Ingresos Tributarios	-0.000335 (0.0012)	-0.000323 (0.0011)	-0.000189 (0.00103)	-0.000196 (0.00102)
Incidencia Pobreza 2005	0.035 (0.10596)	0.037 (0.10579)		
Interacción Ing Tributarios y NBI	0.00024** (0.00015)	0.00024** (0.00015)	0.00022** (0.00014)	0.00022** (0.00014)
Indice Desempeño Integral	0.00065 (0.0012)	0.00060 (0.00107)	0.00091 (0.00118)	0.00085 (0.00119)
NBI 2005			0.000227 (0.00014)	0.000636 (0.00008)
Efectos de año	SI	NO	SI	NO
Observaciones	967	967	967	967

Errores estándar robustos en paréntesis

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

De acuerdo a los resultados encontrados en la Tabla No. 7, la variable que relaciona a los antiguos paramilitares con la presencia de bandas criminales en los municipios de Colombia

resulta ser significativa y positiva para todas las especificaciones realizadas. Esto es acorde con los resultados encontrados en la Tabla No.5 pero efectivamente, el efecto marginal de las variables cambia de magnitud. Esto corrobora empíricamente la idea que se ha manejado en Colombia sobre la influencia que tuvo la desmovilización de las autodefensas en el surgimiento de grupos delincuenciales que se catalogan como Bacrim. De esta manera, se comprueba empíricamente a escala municipal la observación que hicieron la MAPP/OEA (2006) y autores como Grajales (2011): los municipios con presencia antigua de grupos paramilitares son más propensos a tener bandas criminales entre 2006 y 2008, es decir, después de la desmovilización. Esto puede llevar a cierto cuestionamiento de las condiciones y contexto en el que se dio el proceso de desmovilización, pues queda claro que las autodefensas desmovilizadas tienen algo que ver con la aparición de las Bacrim en los municipios.

Con respecto a las variables relacionadas con la existencia de oportunidades de lucro es importante destacar que la oportunidad de controlar el narcotráfico, vista a través de la aptitud geográfica del terreno para que se cultive coca, resulta significativa. El coeficiente correspondiente es de signo positivo, lo que indica que la probabilidad de que una banda criminal haga presencia en un municipio aumenta cuando dicho municipio tiene condiciones físicas propicias para el cultivo de coca. En dichos municipios existe mayor probabilidad de presencia de bandas, pues los grupos buscan ejercer su autoridad y control sobre los beneficios que da ese negocio. Esto concuerda con lo expuesto por Reuter (1983), Escobedo (2009), Massé (2012) y Prieto (2013), pues lleva a afirmar que las bandas criminales son grupos que se dedican, entre varias cosas, al narcotráfico y que además se ubican en lugares que facilitan su actividad.

La combinación del resultado anterior con lo encontrado con la variable paramilitar hace ver que hay continuidad entre éstos y las bandas. Dicha continuidad gira alrededor del negocio de las drogas pues se ha confirmado que los paramilitares lo manejaban antes de su desmovilización y la presencia de las bandas se ve explicada en parte por la aptitud de los terrenos para el desarrollo de cultivos ilícitos. Este escenario confirma los argumentos expuestos por Echandía (2013) sobre la relación entre las AUC y las Bacrim a través del negocio de las drogas, pues las variables de narcotráfico y paramilitarismo son relevantes. Lo anterior haría intuir también que el aumento de la violencia atribuible a bandas en algunos departamentos y en el total nacional (ver Gráfica No.1 y Gráfica No.3) responde a procesos de enfrentamiento y expansión de éstas

por el control de fases del negocio de las drogas que dejaron las autodefensas.

Las otras variables que se incluyen para identificar qué elementos del canal del lucro son relevantes para la existencia de una banda criminal son los ingresos tributarios y el indicador que refleja la actividad minera en los municipios. Con respecto a éste último, hay que decir que no es relevante, lo que lleva a inferir que el lucro que representa el negocio minero no es una razón totalmente importante para que exista presencia de Bacrim desde 2006 a 2008. Por otro lado, la variable de ingresos tributarios refleja la riqueza que existe en el municipio y que puede ser objeto de deseo por parte de las bandas criminales. En la estimación se encuentra que, a nivel individual, la variable no es significativa.

La incidencia de la pobreza se utiliza como una de las variables que refleja la situación socioeconómica de la población. De acuerdo con la Tabla No.7 la variable no es relevante, por lo que a nivel municipal se puede afirmar que el porcentaje de pobreza en la población no afecta de forma negativa ni positiva la probabilidad de que exista una banda criminal en el país. La otra variable que puede reflejar la condición socioeconómica de cada municipio es el NBI; aunque no es significativa. No existe suficiente evidencia econométrica para afirmar que el índice de necesidades básicas insatisfechas afecte directamente la probabilidad de que surja una Bacrim. El efecto de dicha variable se ve de forma conjunta al efecto de los ingresos tributarios y está dado por el impacto que tiene la interacción que se introdujo al modelo anteriormente. El coeficiente relacionado con la interacción entre la riqueza (medida a través del recaudo de impuestos locales) y la pobreza (medida mediante NBI) es positivo y significativo. Esto indica que la riqueza de un municipio, combinada con las privaciones de la población, crea oportunidades para que la criminalidad pueda ser vista como un tipo de negocio estimulando la presencia de bandas criminales a nivel municipal. Siguiendo los argumentos de Sarmiento y Becerra (1998), Sarmiento (1999), Demombynes y Ozler (2005) y Schulhofer-Wohl y Sambanis (2010), esto corrobora la idea de que las Bacrim explotan la brecha entre las privaciones sociales y la riqueza de la economía legal en un territorio (generando la oportunidad de extraer rentas de la población). Esto, en la práctica, se refleja en delitos como la extorsión y amenaza hacia negocios legales como el comercio y el transporte.

Otra variable relacionada con la existencia de oportunidades de lucro y que ha tomado importancia en los últimos años es la posibilidad de controlar la minería ilegal en el país. Al

analizar si los municipios productores de oro, plata o platino se enfrentan a un mayor número de eventos violentos por parte de las bandas criminales se encuentra que el indicador no es relevante. Este resultado lleva a afirmar que no existe tanta evidencia sobre la idea de que la oportunidad de controlar la minería estimula la presencia y comportamiento de las Bacrim. Lo anterior puede deberse a que la relación entre bandas y minería se ha dado más en los últimos años que en el período de estudio de este documento.

Por último, está la presencia del Estado como factor que puede alterar la probabilidad de que una banda criminal se encuentre en un municipio colombiano. La variable de presencia estatal no es significativa en las distintas especificaciones del modelo, lo que conduce a afirmar que el ejercicio de autoridad del Estado (visto a través de su desempeño integral) no constituye un estímulo a favor o en contra de la presencia de Bacrim. Este resultado es sorprendente y puede deberse a que el indicador escogido refleja la capacidad administrativa municipal pero no la habilidad del Estado para ejercer la autoridad.

V. Conclusiones

Este trabajo identifica y examina empíricamente los factores que incidieron en la aparición y desarrollo de las bandas criminales, también conocidas como Bacrim, en Colombia. Con base en la revisión de literatura internacional y nacional, el trabajo identifica distintas variables que pudieron haber influido en la presencia de las bandas: el proceso de desmovilización de los paramilitares, la existencia de oportunidades de lucro, la situación socioeconómica en el país y la presencia del Estado. El trabajo aplica una estrategia de estimación: se realiza con datos de orden municipal y evalúa de qué depende la probabilidad de existencia de una banda criminal durante 2006 a 2008. Para implementar estas estrategias se conformó una base de datos a partir de información proporcionada por CERAC, DNP, SIMCI, SIMCO, IDEAM y CEDE.

Con base en las estimaciones realizadas se encuentra evidencia a favor de la hipótesis según la cual el proceso de desmovilización de paramilitares influyó en la aparición de bandas criminales. Los resultados muestran que la presencia de autodefensas incide de forma significativa y positiva sobre la probabilidad de presencia de una Bacrim. Igualmente, varios

elementos relacionados con la oportunidad de lucro resultan relevantes en las estrategias de estimación realizadas. El efecto que tiene la oportunidad de controlar el narcotráfico es positivo y significativo a nivel municipal, por lo que se ratifica la idea de que las bandas van en busca de buenas oportunidades de negocio. El resultado encontrado sobre las variables de paramilitarismo y narcotráfico muestra que el fenómeno de las Bacrim guarda continuidad con el de las autodefensas, con respecto al deseo de controlar el negocio de las drogas . Por otro lado, no se encuentra impacto relevante de la actividad minera. Esto muestra que la minería no siempre fue un factor determinante durante los primeros años de aparición y desarrollo de las bandas criminales en el país. Con respecto a la variable de incidencia de la pobreza, no es significativa para el estudio municipal. Estos hallazgos confirman ideas e hipótesis que se oyen a menudo entre observadores y estudiosos del fenómeno de las Bacrim.

Este trabajo también presenta dos hallazgos interesantes: en primer lugar, la confluencia geográfica de oportunidades de lucro y privaciones medida mediante la interacción entre ingresos tributarios locales y NBI resulta ser un determinante significativo de la aparición y nivel de actividad de las Bacrim. El impacto y significancia de dicha variable concuerda con el hecho de que las bandas criminales se nutren de la extorsión a los negocios legales. Esto ya lo han reportado los medios de comunicación en ciudades como Buenaventura y Santa Marta, especialmente en municipios y con alto NBI. En segundo lugar, no se encuentra un efecto significativo de la presencia estatal. Esto puede deberse a que el indicador no refleja adecuadamente la presencia del Estado o a la influencia del mismo sobre las bandas criminales.

El presente documento contribuye a comprender el surgimiento reciente de bandas criminales en el país a escala municipal. Los resultados encontrados tienen implicaciones directas sobre la forma en la que se concibe la criminalidad en Colombia. Dada la evidencia empírica sobre las distintas razones a las que se puede atribuir la presencia y evolución de las Bacrim en el país, es importante enfocar la atención hacia elementos como la oportunidad de lucro y la desmovilización de agentes que han usado la violencia con fines económicos o políticos. El hecho de que se afirme que hay continuidad entre los paramilitares y las Bacrim hace que se planteen cuestionamientos sobre el proceso de desmovilización y el manejo del crimen organizado en el país. Esto se debe a que los incentivos económicos que representa la ilegalidad

son tan altos que los diseñados para alejarse de la vía armada pueden no ser suficientes. Lo anterior ya se había explorado en la literatura económica pues Tilly (2007) afirma que en países con historia relacionada al conflicto y a la violencia, aparecen "expertos" de la criminalidad que se resisten a dejar de vivir de ésta.

La existencia del fenómeno de las bandas criminales no responde exclusivamente a una razón. Este trabajo muestra que se debe a la conjunción de varias condiciones, las cuales responden básicamente a la herencia que dejaron los antiguos paramilitares y a las oportunidades de lucro (apropiación de rentas y explotación de recursos naturales: minería y cultivos ilegales) que hacen de la criminalidad una forma de negocio. Es importante entonces tener en cuenta el impacto que tienen estos elementos sobre la evolución de la delincuencia en el país. Esto cobra más importancia en un contexto en el que Colombia está buscando salir del conflicto armado interno a través de una negociación con grupos cuya mayor forma de expresión es la violencia para defender sus intereses económicos. Los resultados encontrados muestran que controlar factores relacionados al narcotráfico, y la existencia de incentivos económicos para quienes se han dedicado a la delincuencia parece ser fundamental a la hora de evitar el surgimiento y desarrollo de una organización criminal como las Bacrim en la actualidad.

Referencias

Arias, A. (2012). Las Bacrim retan a Santos. *Arcanos*, 17. Recuperado el 4 de abril de 2013, en http://www.arcoiris.com.co/wp-content/uploads/2011/arcanos/ARCANOS_17_FINAL.pdf.

Becker, G (1968). Crime and Punishment: An Economic Approach. *Journal of Political Economy* 76 (2). 169-217.

Betancur, I. (2010). Impacto sobre el crimen en Medellín de la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara. Tesis de maestría no publicada. Universidad de los Andes. Recuperado el 5 de junio de 2013, de https://biblioteca.uniandes.edu.co/Tesis_12010_primer_semestre/636.pdf

Bottía, M. (2003). La presencia y expansión municipal de las FARC: Es avaricia y contagio, más que ausencia estatal. Documento CEDE 2003-03.

Carrillo, R. (2012). El crimen en la costa Caribe colombiana: Bases para el diseño de una política pública. *Revista Económicas CUC*. 33(1). 115-134.

CERAC. (2009). Medición y representación de la violencia asociada al conflicto armado interno en Colombia. En Restrepo, J & Aponte, D (Eds.), *Guerras y violencias en Colombia, herramientas e interpretaciones* (pp. 587-596). Bogotá, Colombia.: Editorial Pontificia Universidad Javeriana..

Collier, P. (1994). Demobilization and Insecurity: A study in the economics of the transition from war to peace. *Journal of International Development*, 6(3). 343-351.

-----, (2000). Rebellion as Quasi-Criminal Activity. *The Journal of Conflict Resolution*, 44(6). 839-853.

Collier, P. (2004). Natural Resources and Conflict in Africa. *War in Africa*. Crimes of War Project.

Collier, P. & Hoeffler, A. (1999). Justice Seeking and Loot Seeking in Civil War. World Bank Working Paper.

-----, (2000). Greed and Grievance in Civil War. World Bank Policy Research Working Paper

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. (2007). Disidentes, rearmados y emergentes: ¿bandas criminales o tercera generación paramilitar?. Recuperado el 20 de agosto de 2013, en <http://www.oim.org.co/reconciliacion-y-reintegracion/1478-disidentes-rearmados-y-emergentes-bandas-criminales-o-tercera-generacion-paramilitar.html>

Demombynes, G & Ozler, B. (2005). Crime and local inequality in South Africa. *Journal of Development Economics*, 76. 265-292.

Díaz, A. M. (2003), “Determinantes de la presencia guerrillera en Colombia”. Tesis de Maestría en Economía, Pontificia Universidad Javeriana.

Echandía, C. (2013). Narcotráfico: Génesis de los paramilitares y herencia de las bandas criminales. *Informes FIP*, 19. Recuperado el 5 de mayo de 2013, en http://www.ideaspaz.org/images/Info%2019%20dimensiones%20geograficas_final%20web.pdf.

Ehrlich, I. (1973). Participation in Illegitimate Activities: A Theoretical and Empirical Investigation. *Journal of Political Economy* 81 (3). 521-565.

Escobedo, R. (2009). Dinámica de las bandas asociadas al narcotráfico después de la desmovilización de las autodefensas: 2005-2008. Bogotá, Colombia: Vicepresidencia de la República - Observatorio de Derechos Humanos.

Espinosa, J. & Villegas, M. (2013). La debilidad institucional de los municipios en Colombia. Friedrich Ebert Stiftung, Recuperado el 27 de septiembre de 2013, en <http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/09888.pdf>.

Fajnzylber, P. , Lederman, D. & Loayza, N. (2002). What causes violent crime?. *European Economic Review*. 46. 1323-1357.

Gambetta, D. (1993). The Sicilian Mafia. The business of private protection. Cambridge, Harvard University Press.

Grajales, J. (2011). El proceso de desmovilización de los paramilitares en Colombia: entre lo político y lo judicial. *Desafíos*, 23 (2), 149-194.

Granada, S., Restrepo, J., & Sánchez, C. (2009). Controlando la medición: alcances y limitaciones de la información en conflictos armados. En Restrepo, J & Aponte, D (Eds.), *Guerras y violencias en Colombia, herramientas e interpretaciones* (pp. 203-232). Bogotá, Colombia.: Editorial Pontificia Universidad Javeriana

Granada, S., Restrepo, J., & Tobón, A. (2009). Neoparamilitarismo en Colombia: una herramienta conceptual para la interpretación de dinámicas recientes del conflicto armado colombiano. En Restrepo, J & Aponte, D (Eds.), *Guerras y violencias en Colombia, herramientas e interpretaciones* (pp. 467-501). Bogotá, Colombia.: Editorial Pontificia Universidad Javeriana.

Grossman, H. (1999). Kleptocracy and Revolutions. *Oxford Economic Papers*, 51, 267-283.

Instituto de Estudio para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ. (2011). VII Informe sobre presencia de grupos narcoparamilitares en el 2011. Recuperado el 5 de julio de 2013, en http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2012/03/722_VII-Informe-presencia-narcoparamilitarismo-2011-INDEPAZ.pdf.

Kumar, V. & Skaperdas, S. (2008). On the Economics of Organized Crime. Working Paper 070815, University of California-Irvine, Department of Economics.

Martín, J. & Navarro, J. (2007). Metodología econométrica para el análisis económico del delito. Los modelos de datos de panel. *Revista Española de Investigación Criminológica*. 5. Artículo 3.

Massé, F. (2013). Entre el paramilitarismo y el crimen organizado: Discusiones en torno a la caracterización del actor. En *Bandas Criminales: seguridad, paramilitarismo y crimen organizado en Colombia* (Relatoría, pp.1-3). Bogotá, Colombia: VIII Seminario sobre Seguridad y Defensa, GISDE, Universidad Nacional.

Misión de Apoyo para el Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA). (2006). Sexto Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia. Bogotá, Colombia.

----- (2006). Séptimo Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia. Bogotá, Colombia.

----- (2007). Octavo Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia. Bogotá, Colombia.

----- (2007). Noveno Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia. Bogotá, Colombia.

----- (2008). Décimo Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia. Bogotá, Colombia.

----- (2008). Decimoprimer Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia. Bogotá, Colombia.

----- (2009). Decimosegundo Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia. Bogotá, Colombia.

----- (2009). Decimotercer Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia. Bogotá, Colombia.

----- (2010). Decimocuarto Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia. Bogotá, Colombia.

----- (2011). Decimoquinto Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia. Bogotá, Colombia.

Montenegro, A., Posada, C. & Piraquive, G. (2000). Violencia, criminalidad y justicia: otra mirada desde la economía. *Coyuntura Económica*. 30(2). Fedesarrollo. 85-132.

Ojeleye, O. (2011). The Application of Demobilization, Disarmament and Reintegration (DDR) at the Sub-National level in the Niger Delta. *Civil Wars*, 13(2). 141-156.

Prieto, C. (2013). Las Bacrim y el Crimen Organizado en Colombia. Policy Paper 47, Friedrich Ebert Stiftung.

Reuter, P. (1983). *Disorganized Crime: The Economics of the Visible Hand*. Cambridge, Massachusetts, MIT Press.

Rocha, R. (2011). *Las nuevas dimensiones del narcotráfico en Colombia*. Bogotá, Colombia: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - Ministerio de Justicia y del Derecho.

Saab, B. & Taylor, A. (2009). Criminality and Armed Groups: A comparative study of FARC and Paramilitary Groups in Colombia. *Studies in Conflict & Terrorism*, 32 (6). 455-475.

Sánchez, F. & Núñez, J. (2001). Determinantes del crimen violento en un país altamente violento: el caso de Colombia. Documento CEDE 2001-02.

Sarmiento, A. (1999). Violencia y equidad. *Planeación y Desarrollo*, 30(3). 47-62.

Sarmiento, A. & Becerra, L. (1998). Análisis de las relaciones entre violencia y equidad. Working Paper 93. Departamento Nacional de Planeación. Recuperado el 21 de mayo de 2014, en: https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DEE/Archivos_Economia/93.pdf.

Schelling, T. (1971). What is the Business of Organized Crime?. *The American Scholar*, 40 (4), 643-652.

Schulhofer-Wohl, J. & Sambanis, N. (2010). Disarmament, Demobilization and Reintegration Programs: An Assessment. *Research Report*. Suecia: Folke Bernadotte Academy Publications.

Spagat, M., Restrepo, J. A. & Vargas, J. F. (2006). “El conflicto en Colombia. ¿Quién hizo qué a quién? Un enfoque cuantitativo (1988-2003)”. IEPRI. Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia. Bogotá: IEPRI - Editorial Norma.

Tilly, C. (2007). *Violencia Colectiva*. Barcelona, Editorial Hacer.

Wooldridge, J. (2009). *Introductory Econometrics*. Cengage Learning.